

Artículo de divulgación

Conflictos urbano-rurales: Múltiples miradas

Rosenstein, S.¹; Campos, V.¹; Murray, R.² (ex aequo); Duré, L.¹

¹ Cátedra de Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR

² Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – AER Roldán
susanarosenstein5@gmail.com

Introducción

El proceso de agriculturización que se viene dando en la Región Pampeana en los últimos 20 años, ha implicado el aumento de la superficie destinada a cultivos agrícolas, el desplazamiento de la ganadería a otras regiones y la incorporación de nuevas tecnologías de insumo con la creciente utilización de productos agroquímicos. En este nuevo escenario, la utilización de productos fitosanitarios está siendo cuestionada muy fuertemente en los últimos años desde distintos sectores de la sociedad: las organizaciones ambientalistas, educadores, médicos, vecinos, funcionarios, entre otros, que reivindican el derecho a vivir en un ambiente sano.

Sabemos que la provincia de Santa Fe dictó en el año 1995, cuando el problema recién comenzaba a debatirse, la Ley de Productos Fitosanitarios N° 11273, con el propósito de lograr un uso correcto y racional de los mismos. Con su decreto 552/97 reglamentó su uso y reguló la actividad de elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y destrucción de envases, como así también su depósito y almacenamiento. También esta ley obliga a la inscripción en la Dirección General de Sanidad Vegetal de toda persona física o jurídica que desarrolle algunas de las actividades antes descritas y de aplicadores aéreos y terrestres, regentes^[1] y asesores técnicos.

La ley establece, a través de sus artículos N°33 y N°34, zonas de restricción para las aplicaciones de productos fitosanitarios. En el caso de aplicaciones aéreas, establece la prohibición dentro del radio de 0 a 3000 m de las áreas urbanas para los productos banda roja y deja en manos de los gobiernos locales, a través del dictado de ordenanzas, la posibilidad de autorizar la aplicación de productos banda amarilla, azul y verde, dentro de los 500m. En el caso de aplicaciones terrestres, la ley prohíbe el uso de los productos banda roja en la franja de 0 a 500 m, y permite el uso de cualquier clase a partir de los 500 m.

Según el Artículo N°52, las comunas y municipios están obligados a dictar las ordenanzas que establezcan las excepciones y la delimitación de las plantas urbanas a los efectos de precisar las distancias establecidas en los Artículo N°33 y N°34 de la mencionada Ley. Los límites de las plantas urbanas se establecerán con criterio agronómico y conforme a los principios que dicte el organismo de aplicación.

En este contexto surgen un conjunto de ordenanzas en comunas y/o municipalidades de la provincia para la implementación de zonas de exclusión o libres de aplicación de productos fitosanitarios, caracterizadas por su gran heterogeneidad.

Como era de esperar la fijación de la línea agronómica en manos de los gobiernos municipales y/o comunales, generó conflictos entre los actores locales, fundamentalmente con los productores agropecuarios ubicados en la zona de exclusión, en tanto, parecería que al derecho a vivir en un ambiente sano se le opone el derecho a producir. El problema se agrava cuando tenemos en cuenta que se trata, fundamentalmente, de pequeños productores dedicados al monocultivo de soja, actividad que en el contexto actual permite la supervivencia de la unidad y que a partir de la restricción debe reconvertirse a otra forma de producción alternativa, lo que implica reasignar recursos tanto materiales como no materiales.

Desde el comienzo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia estuvo en desacuerdo con las prohibiciones totales y sí con efectuar regulaciones y controles. Más tarde, firma con el Ministerio de la Producción de Santa Fe un Convenio de Cooperación en Buenas Prácticas en el uso de material fitosanitario, teniendo por objetivo coordinar esfuerzos que aborden las problemáticas derivadas de la manipulación indebida de los productos fitosanitarios, promuevan la capacitación de los actores involucrados y propendan mediante el asesoramiento y apoyo técnico al uso y manejo responsable de tales productos en todas las etapas. (CIASFE, 2012). El convenio crea la figura del agroasesor que tiene, dentro de sus funciones, la de brindar asistencia técnica a Municipios y Comunas en la formulación de las ordenanzas conforme el marco normativo, incrementando de esta forma la participación de los profesionales en el dictado de las misma”. (Convenio, 2011). Sin embargo, a partir del 2013, no se renuevan los contratos y sólo quedan dos agroasesores para toda la provincia.

El conflicto también se plantea con otros grupos sociales, con sus intereses particulares tales como los movimientos ambientalistas (Movimiento Ambientalista “Basta de Cáncer” de Rosario, Ecos de la Sociedad de San Lorenzo, Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones de Venado Tuerto, el Grupo de Reflexión Rural, la Red Nacional de Acción Ecologista) que plantean su preocupación ante la profundización del desarrollo de un sistema productivo tóxico que compromete y lesiona seriamente el derecho a la salud y a un ambiente sano.

Sin duda, encontramos distintas visiones del tema: desde la postura del Colegio de Ingenieros Agrónomos que sostiene que si se aplicaran buenas prácticas agrícolas no sería necesario establecer zonas de restricción, hasta la posición de las ONG que exigen ampliar dichas franjas incluyendo el cuestionamiento a la clasificación toxicológica de agroquímicos utilizada mundialmente.

Dado que cada comuna o municipalidad debía adecuar la legislación a la situación local, encontramos ordenanzas muy distintas entre sí, que ponen en evidencia los intereses opuestos y los conflictos de derechos que se establecen entre productores, vecinos y demás actores de cada localidad. A partir de esta nueva trama de intereses surgen los conflictos judicializados en la provincia, con un nuevo concepto dentro del marco legal que no se había utilizado antes en el ámbito agronómico: “el principio

precautorio”. Este principio invierte la carga de la prueba cuando se trata de cuestiones ambientales, obligando a demostrar fehacientemente que un producto o práctica sospechada de peligroso es inocuo (hasta donde lo permita el horizonte del conocimiento contemporáneo) para las personas y el entorno. Entre tanto, autoriza a tomar medidas “eficaces” para proteger a ambos. Entre los casos judicializados más conocidos se encuentra la demanda realizada por los vecinos de la ciudad de San Jorge a la Municipalidad a los fines de que se prohíba volver a pulverizar en los campos de un productor linderos al límite urbano.

En nuestro país hay grupos de investigación que vienen estudiando el tema desde diferentes enfoques. Así, mientras muchos de ellos hacen referencias concretas al efecto de las pulverizaciones sobre la salud (centrándose algunos en el glifosato en particular)^[2], otros sostienen la inocuidad de los agroquímicos ante la carencia de información suficiente para establecer conclusiones (CASAFA & CIAFA, 2009). Esto muestra que las investigaciones también están teñidas de intereses contrapuestos.

Lo dicho hasta ahora muestra el grado de conflictividad y de heterogeneidad de puntos de vista entre los actores involucrados en el problema. Si bien existe una norma legal provincial que establece claramente las posibilidades y restricciones en relación con la aplicación de productos fitosanitarios, ésta no implica necesariamente la posibilidad de construir consensos entre los actores involucrados, tanto individuales como colectivos: ingenieros agrónomos, investigadores, productores, vecinos, ambientalistas, funcionarios provinciales, municipales y comunales, ONG’s, colegios profesionales, etc.

Además, el grado de conflictividad se incrementa, sobre todo en las localidades más próximas a las grandes ciudades, a raíz del desarrollo de nuevos barrios residenciales que, aprovechando la necesidad de la gente de tener una mejor calidad de vida, avanzan sobre las tierras productivas. Así, y para ilustrar este fenómeno, entre los años 1980 y 2010, la población de la ciudad de Roldán, que comprendía el 0,8 % de la población total de conglomerado del conurbano rosarino, superó el 1,5 %. (Provincia de Santa Fe, 2013). En el período 2008 - 2014, 10.000 has pasaron de rurales a urbanas en toda la provincia, siendo las localidades del Gran Rosario las que mostraron mayor crecimiento; en segundo lugar, detrás de Funes se ubicó Roldán, con 11 nuevos barrios que sumaron más de 8500 lotes (Provincia de Santa Fe, 2014). Eso hace que, en muchos casos, las casas ubicadas en el perímetro del barrio queden a muy pocos metros de las unidades productivas, separadas en la mayoría de los casos por una calle.

Sin duda, hay una puja entre actores que ocupan posiciones diferentes en el territorio, con intereses y metas diferentes, con cuotas de poder diferentes para definir el problema y las posibles soluciones. Y ello se refleja claramente en la heterogeneidad de las ordenanzas locales que regulan la aplicación de productos fitosanitarios: serán más o menos restrictivas en función de las características de las relaciones sociales imperantes dentro de las comunidades y de la posibilidad de intercambio y negociación de puntos de vista que éstas permitan.

El presente trabajo, que forma parte de un proyecto más amplio, se propone como objetivo reconstruir el proceso que culminó con el establecimiento de la ordenanza en la localidad de Roldan (Santa Fe) y su posterior implementación, de modo

de identificar las relaciones conflictivas y las alianzas entre los actores que participaron a partir de sus prácticas.

Cabe aclarar que la ordenanza que rige en la localidad prohíbe la aplicación de productos fitosanitarios en todas sus variables toxicológicas en una franja de seguridad de 100 metros desde la línea de alambrado y fija una zona restringida supervisada con un ancho de 500 metros en torno de todas las zonas protegidas con población, (más los 100 metros de franja de seguridad), en la cual sólo es posible la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con presencia de un profesional.

^[1] Ingeniero Agrónomo encargado de asesorar a la firma que representa en las legislaciones vigentes y promover el cumplimiento de las mismas. Funciones descriptas en la Ley 11273.

^[2] Tales como el Departamento de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Grupo Carrasco UBA – CONICET, Laboratorio de Medioambiente del INTEC, UNL – CONICET, entre otros.

Metodología

Se trata de un estudio de caso. Para relevar la información realizamos entrevistas a informantes calificados y consultamos actas de reuniones, artículos periodísticos, registros de denuncias, etc., con el objeto de reconstruir el proceso. Así mismo, aplicamos entrevistas en profundidad a funcionarios, vecinos urbanos del borde urbano-rural, productores rurales del borde urbano-rural e ingenieros agrónomos del ámbito público y privado que desarrollan su actividad en la localidad para dar cuenta de las prácticas que llevaron y llevan adelante en relación con las restricciones impuestas a la aplicación de productos fitosanitarios y el sentido que adquieren dichas prácticas para ellos. Las entrevistas se realizaron, entre febrero y agosto de 2016, hasta encontrar “saturación” en las respuestas, es decir hasta que nuevas entrevistas no aportaron más información. Ello permitió interpretar las acciones que desarrollan en función de los intereses propios de su actividad y/o de la institución que representan.

El proceso de construcción e implementación de la ordenanza. Las prácticas de los actores

1. Los vecinos

Los vecinos entrevistados, en general recientes, coincidieron en que las fumigaciones comenzaron a ser un problema cuando las *“máquinas pasan al lado de sus casas”*.

Dominaba entre ellos una sensación de vulnerabilidad, aun cuando afirmaban que *“consiguieron”* la ordenanza a través de su accionar. Sentían que la Municipalidad no responde a sus reclamos y que ni siquiera les avisan cuando van a realizar fumigaciones. Es más, afirman que, en muchos casos, tampoco están las recetas ni las autorizaciones de aplicación. La percepción que subyacía entre los vecinos, al momento de las entrevistas, es que hay una alianza estratégica entre el poder local y los productores, frente a la que nada podían hacer.

Lo cierto es que los conflictos entre actores rurales, urbanos y el poder político local no se han resuelto luego del dictado de la ordenanza. A la hora de priorizar quiénes son los causantes, los vecinos no dudaron en nombrar a los productores agropecuarios con los que no visualizaban ninguna posibilidad de consenso.

Afirmaron los vecinos que los conflictos se habían profundizado como consecuencia del accionar de la Municipalidad que no ejerce ningún control sobre el cumplimiento de la ordenanza ni tampoco se hace cargo de la limpieza de la franja de 100 m que el productor abandonó y que se llenó de *“yuyos, ratas, todo tipo de animales y además aumenta la inseguridad”*. Aun así, el problema no parece tener prioridad suficiente como para transformar la acción individual en acción colectiva. Las Comisiones Vecinales de los nuevos barrios estaban más dedicadas a los problemas de infraestructura (agua, gas, caminos de acceso) y seguridad lo que indicaría que no había aún consenso suficiente como para incorporar la cuestión de los fitosanitarios a la agenda de reclamos.

2. Los funcionarios municipales

No encontramos coincidencias entre los funcionarios en relación con el origen del problema. Según algunos, los fitosanitarios no constituían un problema para la población y sí lo era para los desarrolladores de barrios privados que, como exigencia de la provincia, debían presentar estudios previos de impacto ambiental que requerían de una ordenanza regulatoria. El interés estaba puesto en lograr la autorización para urbanizar.

Hay coincidencia en que la iniciativa para la redacción de la ordenanza la llevó adelante la Municipalidad. Sin embargo, hay quienes creen que hubo participación y la redacción fue producto de *“un consenso”* y otros que opinan que fue una decisión del Intendente.

En relación con los conflictos, algunos enuncian en las entrevistas que disminuyeron a partir de la promulgación de la ordenanza y lo atribuyen al control sobre las aplicaciones que realiza el profesional. De hecho, afirman: *“las denuncias no son frecuentes”*.

Sin embargo, admiten que la Municipalidad no tiene respuestas en relación con el control de malezas en la franja de 100 m y menos aún tiene propuestas productivas para el área. Admiten también que la Municipalidad no se hace cargo de contratar al profesional *“para no ser juez y parte”*, esto es, el pago de los honorarios le corresponde al productor.

La falta de acuerdos entre los funcionarios municipales se pone en evidencia también en relación con el control. Mientras que, como acabamos de ver, algunos no lo cuestionan, otros enuncian que debería estar a cargo de un profesional de la agronomía.

3. Los productores agropecuarios

Los productores entrevistados, que tienen parte de sus predios en áreas

periurbanas, coincidieron en que el problema se desató a partir del 2008, con el conflicto por la resolución 125 que, según ellos, enfrentó a la sociedad con los productores. Y simultáneamente, dicen en las entrevistas, se produjo el auge del negocio inmobiliario que avanza sobre la tierra productiva para convertirla en tierra urbana, con la autorización municipal.

Entonces, para muchos, la finalidad de las ordenanzas que restringen la aplicación de productos fitosanitarios no era conciliar el derecho a producir con el derecho a la salud de los vecinos sino lograr que vendieran sus tierras lo más baratas posible. Sugieren entonces, que hay actores con mayor cuota de poder que influyeron en forma decisiva en la instalación del conflicto que, en apariencia, involucraba sólo a vecinos y productores.

Desde la mirada de los productores es lógico que los conflictos se hayan intensificado a partir de la afluencia de nuevos habitantes que ocuparon los barrios privados. También enuncian que el origen de los conflictos está en la desinformación de la gente, desinformación respecto de las características de la producción agropecuaria y de las reales condiciones de su nuevo hábitat.

Todos afirmaron haber modificado sus prácticas en pos de cumplir con las restricciones de la ordenanza, buscando todas las alternativas productivas para la franja de 100m. Reconocen también que dejaron de cortar el pasto de la franja, dado que, según ellos, el mantenimiento le corresponde a la Municipalidad, mostrando así una parte del múltiple conflicto, en este caso, con el poder político y con los vecinos.

Sin embargo y a pesar de los cambios en las prácticas productivas, para la mayoría de los productores el grado de conflictividad con los vecinos se incrementó debido al progresivo aumento de la densidad poblacional. De hecho, enuncian que han tenido denuncias y multas o que los vecinos los han increpado, en general, por infracciones que afirman no haber cometido. Pero no todos los productores acuerdan con el aumento del conflicto. Otros, quizás más cercanos al discurso del poder político local, enuncian que, con la normativa vigente, *“el problema está bastante mitigado”*.

En relación con el control, los productores hacen referencia al abandono de la franja de 100m. La Municipalidad no sólo no se hace cargo sino que, además, no escucha las propuestas que se hacen para abordar el problema que aluden a que la responsabilidad de dejar los 100 m como espacio verde le correspondería al urbanizador.

Entonces, manifestaron que no son ellos los que no hacen bien las cosas cuando fumigan, ellos se sienten otras “víctimas” de este entramado en el que dominan relaciones de poder asimétricas, en el que unos pocos con poder económico y político imponen decisiones al resto.

De la misma manera, este entramado social se pone en evidencia cuando los productores intentan plantear soluciones para abordar los conflictos: creen que es necesario buscar caminos para que la gente se informe, para que haya respeto de uno hacia el otro.

Entonces, esa sensación de vulnerabilidad no sólo domina entre los vecinos, también entre los productores que ven amenazada la posibilidad de continuar con su actividad en ese espacio que les pertenece.

4. Los ingenieros agrónomos

Los profesionales locales, tanto de la actividad pública como privada, coincidieron con algunos de los funcionarios y con los productores en que la causa del surgimiento del problema es el negocio inmobiliario que avanza con loteos rodeados por explotaciones agropecuarias.

Declararon que *“hubo una campaña de difamación violenta contra los productores que aplicaban”* (productos fitosanitarios), instigada por intereses de los desarrolladores de barrios privados, coincidiendo con el conflicto desatado por la resolución 125 en el año 2008.

La consecuencia fue que no hubo negociación posible entre vecinos y productores. Pareciera entonces que, en coincidencia con la opinión de otros actores, el origen del conflicto no estuvo tanto en el rechazo a las aplicaciones de productos como en los intereses de un actor que no se muestra pero que aprovecha un conflicto mayor, como fue la crisis del 2008, para accionar a su favor.

Coincidieron en que la ordenanza la redactó el Intendente tomando modelos de otras localidades. Su postura es que *“todo es cuestión de control y no de prohibición”* pero que es más fácil prohibir para no tener que controlar. En relación con los cambios en las relaciones sociales en la localidad, la percepción manifestada por los profesionales es que cada actor, productor o vecino, pelea por sus intereses individuales y no hay posibilidad, por ahora, de acciones colectivas. Sin embargo, ellos no se involucran en el problema. Son los otros los que deben cambiar para que estas acciones sean posibles.

También atribuyen el conflicto a la desinformación de la gente. Afirman que lo que circula es que glifosato, Monsanto y cáncer van de la mano y que el profesional es un *“vendedor de productos contaminantes”*.

En relación con la implementación, saltó a la vista que los profesionales no acuerdan con la prohibición de las aplicaciones y también cuestionan, por un lado, el nivel de capacitación de las personas encargadas de controlar y, por el otro, el hecho de que la Municipalidad no se haga cargo de la contratación del ingeniero que debe verificar el cumplimiento de la ordenanza. Enuncian que el actor que debe ser controlado es el desarrollador de los barrios privados: es él el que debería estar obligado a dejar sin urbanizar los 100 m contiguos a los lotes de producción.

Quizás, lo que subyace en el conflicto no explícito entre los profesionales y el poder local es que se han quedado sin las herramientas del modelo tecnológico dominante que tan bien conocen. Frente al disgusto del productor, tienen que asesorarlo sobre nuevas estrategias de control de las plagas con productos de baja toxicidad y verificar que las cumpla pero, además, carecen de información y experiencia para plantear modelos productivos alternativos más adecuados a las restricciones impuestas

en las áreas periurbanas. Y se perfila ya una demanda en este sentido que los profesionales sienten que aún no pueden satisfacer.

A modo de conclusión

Los actores involucrados en el problema del área periurbana de la localidad de Roldán no han logrado construir un significado común, ni siquiera básico acerca del problema.

La ordenanza parece no conformar a nadie. Salvo algún funcionario y algún productor, más ligado al discurso oficial, el resto la significa como una decisión inconsulta del poder municipal, teñida de intereses políticos y económicos.

Lo cierto es que las respuestas indican que la ordenanza no trajo *“tranquilidad a la gente”*. Generó intranquilidad entre los vecinos que desconfían de los productores, entre los productores porque se sienten amenazados por los vecinos y temen por la continuidad de su actividad, entre los profesionales porque sienten que están en el medio del conflicto. Y todos a la vez desconfían del poder político local.

Y si analizamos la etapa de la implementación, la característica que dominó es la mutua atribución de “culpas”, mostrando que los conflictos se profundizaron. Mientras que para los vecinos, la “culpa” es de los productores que hacen oídos sordos a la legislación vigente, para productores y técnicos, la “culpa” es de los vecinos que desconocen las tareas propias de la producción agrícola y acusan sin fundamentos. Sin embargo, hay un punto de consenso: la Municipalidad es la “culpable”. Culpable de no ejercer control sobre el cumplimiento de la Ordenanza, de no designar ingenieros agrónomos para realizarlo, de no hacerse cargo de la limpieza de la franja de 100 m, de no escuchar los reclamos ni tampoco las propuestas, de no obligar a los desarrolladores a dejar 100m sin urbanizar contiguos a los lotes de producción.

En síntesis, lo que se percibe en la localidad es una sensación de impotencia. Impotencia en el sentido de imposibilidad, incapacidad, debilidad para modificar el estado de cosas. Todos se sienten “víctimas” de alianzas estratégicas que no pueden manejar. Para los vecinos la alianza es entre los productores, aplicadores y el Municipio, para los productores, entre el poder político y el poder económico de los desarrolladores de barrios privados.

También es cierto que la realidad es mucho más compleja de lo que aparentaba ser a priori. No se trata de un mero conflicto entre vecinos y productores por la aplicación de productos fitosanitarios en las áreas de restricción. Hay otros actores involucrados, en este caso los desarrolladores que no se muestran, que aprovechan situaciones de conflicto para operar a su favor, que establecen alianzas estratégicas para imponer el camino favorable a sus intereses. Sin duda, lo que plantean es una puja abierta por el territorio, un campo de lucha por la apropiación y la transformación del espacio rural en urbano, un campo en el que actúan agentes con cuotas de poder diferenciales frente a un Estado que carece de herramientas de gestión para ordenar el territorio en beneficio de todos los ciudadanos.

La intervención

Frente a la complejidad de la situación, el equipo de trabajo se propone intervenir con el objetivo de encontrar puntos de consenso, acuerdos básicos que tiendan a mejorar la convivencia entre vecinos y productores agropecuarios, buscando alguna forma de equilibrio entre ambos derechos.

Partimos del supuesto de que, tanto unos como otros, tienen que reconocerse mutuamente como actores que conviven en un mismo espacio, que ambos tienen presencia, que ambos tienen derechos. Atribuirse ignorancia y culpas mutuas implica no dar entidad al punto de vista del otro y eso no hace más que profundizar el conflicto.

En este sentido, la propuesta es avanzar en un programa de actividades dirigido a toda la comunidad, que tenga como objetivo conocer y evaluar diferentes miradas acerca de temas relacionados con la problemática del uso de productos fitosanitarios. El énfasis puesto en el encuentro facilitará el intercambio y la negociación de puntos de vista entre los actores en conflicto. Sabemos que los acuerdos son siempre parciales y temporarios y que no es una tarea fácil pero, aún así, creemos que es el mejor camino para tomar conciencia de que los seres humanos tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan.

Bibliografía

- CARRASCO, A., 2010. Efecto del glifosato en el desarrollo embrionario de *Xenopus laevis* (Teratogénesis y glifosato). Informe preliminar. Laboratorio Embriología Molecular CONICET – UBA. Disponible en: <http://www.centromandela.com/documentos/Carrasco-Informe%20sobre%20glifosato.pdf>. Consulta 22-05-2014
- CASAFE & CIAFA, 2009. Comunicado de Prensa: “Acerca de la seguridad de los Agroquímicos”, Buenos Aires.
- CIASFE 2012. -Convenio entre el Ministerio de la Producción y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe. Disponible en: <http://www.agenciafe.com/noticias/val/189073/convenio-para-optimizar-la-proteccion-de-los-agroquimicos.html> Consulta 30-03-2014
- COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROQUÍMICOS. 2009. Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente. Buenos Aires. Disponible en: <http://www.msar.gov.ar/agroquimicos/pdf/INFORME-GLIFOSATO-2009-CONICET.pdf> Consulta 30-04-2014.
- CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 2011. Disponible en: http://www.ciasfe4.org.ar/ficha_lcd/3 Consulta 22-07-2014
- KACZEWER, J. 2002. Uso de agroquímicos en las fumigaciones periurbanas y su

efecto nocivo sobre la salud humana. Buenos Aires.

LEY N°11273. Ley de Productos Fitosanitarios. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe. 16 de Enero de 1996. Decreto reglamentario 0552/97

LEY N°25.675 Ley General Del Ambiente. Boletín Oficial de la República Argentina 26 de Noviembre de 2002.

LONG, N. 2000. Antropology, Development and Modernities. Routledge. London,

MANÇANO FERNANDES, B. 2006. “Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales”. Disponible en <http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf> Consultado 3-8-15

MARTÍNEZ CARAZO, P. 2006. El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión. Universidad del Norte Colombia.

ORDENANZA N° 738 – 2012. Aplicación de fitosanitarios para el distrito de Roldan. Disponible en: <http://www.rolدان.gov.ar/?inc=hcm/listar&key=ordenanzas&year=2012> Consulta 02-07-14

PROVINCIA DE SANTA FE. 2013. Crecimiento del Gran Rosario en los Últimos 30 años, Período 1980 - 2010. Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación y Política Económica. Consultado el 17/08/2016 en: <https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/179264/876067/file/Gran%20Rosario.pdf>

ROSENSTEIN, S; BULACIO, L., ESCOLÁ, F., GIULIANI, S.; PANELO, M. 2007. “Prácticas y representaciones acerca del “riesgo”: el uso de productos fitosanitarios en la agricultura”. Revista Theomai N° 15. Primer semestre del 2007. ISSN 1515-6443 Universidad de Quilmes. Pp 1-20.

SAUTU, R. 2005. Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Lumiere. Buenos Aires.